



LEGISLACIÓN LABORAL

# CONTRATACIÓN ESTATAL

## CONTRATACIÓN ESTATAL



La contratación estatal es una herramienta fundamental para que el Estado cumpla con su misión de satisfacer las necesidades de la sociedad y garantizar el bienestar general. Para lograrlo, esta debe regirse por principios claros y contar con características esenciales que aseguren su transparencia, eficiencia y legalidad.

En primer lugar, la contratación estatal se guía por principios fundamentales. El principio de transparencia busca que los procesos sean claros, imparciales y públicos, permitiendo verificar que no haya corrupción y que todo esté disponible para la ciudadanía, como ocurre con la publicación de procesos en el SECOP. El principio de economía garantiza que los recursos públicos se usen de manera eficiente, seleccionando las mejores ofertas sin sacrificar calidad, como cuando se elige al contratista que ofrece la mejor relación costo-beneficio. Por su parte, el principio de responsabilidad obliga, tanto al Estado como a los contratistas, a actuar con ética y profesionalismo, asegurando el cumplimiento de los términos del contrato. El principio de igualdad te garantiza que todos los interesados en participar lo hagan en condiciones equitativas, sin privilegios ni exclusiones injustas. Además, la selección objetiva exige que las decisiones se tomen con base en méritos y capacidades, evitando favoritismos, mientras que el principio de legalidad asegura que todo contrato y acto se realice conforme a las leyes vigentes, como lo establece la Ley 80 de 1993.

Las características de la contratación estatal son igualmente importantes. Su finalidad pública significa que siempre se actúa en beneficio del interés general, como cuando se construyen hospitales o carreteras para la comunidad. Los contratos estatales están sujetos a normas imperativas, lo que obliga a cumplir con procedimientos legales y formales para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos. Además, la preeminencia del interés general permite que el Estado tome decisiones excepcionales, como modificar o suspender un contrato si es necesario para proteger a la sociedad.

La contratación estatal también se caracteriza por su formalidad. Todo debe estar documentado, desde la firma del contrato hasta la aprobación del presupuesto y su publicación en plataformas como el SECOP. Esto garantiza que el proceso sea claro y legal. A su vez, la contratación está sometida a control y vigilancia en diferentes etapas: antes, durante y después de su ejecución, por organismos como la Contraloría y la Procuraduría, quienes verifican que se cumplan los términos pactados. La transparencia y publicidad son otras características claves, pues permiten que cualquier persona pueda conocer los procesos y resultados, generando confianza en la ciudadanía. Por último, el régimen de excepcionalidad le otorga al Estado ciertos poderes especiales, como modificar unilateralmente un contrato si surgen necesidades imprevistas que afecten el bienestar general.

En resumen, cuando estos principios y características se aplican de manera rigurosa, los procesos de contratación estatal logran ser eficientes, obteniendo los mejores resultados con los recursos disponibles, transparentes, evitando la corrupción y ganando la confianza de la ciudadanía; y alineados con el interés general, respondiendo a las necesidades de la sociedad y contribuyendo al desarrollo del país. Así, la contratación estatal se convierte en una herramienta clave para la buena administración de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines del Estado.